



LEYES Y REGLAMENTOS

PROMULGADOS PARA DAR EFECTO A LAS DISPOSICIONES DE LOS TRATADOS INTERNACIONALES SOBRE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS

De conformidad con los artículos pertinentes de los tratados internacionales sobre estupefacientes y sustancias sicotrópicas, el Secretario General tiene el honor de comunicar el texto siguiente.

COLOMBIA

Comunicado por el Gobierno de Colombia

NOTA DE LA SECRETARIA

- (a) En aras de la claridad, la Secretaría puede hacer algunas modificaciones de tipo editorial en el texto. De ser el caso, el texto insertado y/o cambiado por la Secretaría se indica entre corchetes [].
- (b) Sólo los pasajes concernientes a la fiscalización de estupefacientes o sustancias sicotrópicas han sido reproducidos en este documento. Las partes no pertinentes de leyes y reglamentos han sido suprimidas por la Secretaría; esas supresiones se indican con puntos suspensivos entre corchetes [...].

	<u>Contenido</u>	<u>Página</u>
E/NL.2001/39	CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES (CONSEP) RESOLUCIÓN N° 0001-AS (30 DE ENERO DE 1995)*	2
E/NL.2001/40	MINISTERIO DE SALUD: RESOLUCIÓN N° 00200 (23 DE ENERO DE 1996)*	4
E/NL.2001/41	LEY 356: POR LA CUAL SE ESTABLECEN NORMAS TENDIENTES A COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES (4 DE FEBRERO DE 2000)*	6

*Nota de la Secretaría: Este documento es una reproducción directa de los textos comunicado a la Secretaría.

RESOLUCION No. **E . 0 0 0 1**

3 0 ENF. 1995

Por la cual se adiciona la Resolucion No. 009 de 1987 ¹

EL CONSEJO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

En ejercicio de las facultades que le confieren el Literal C del Artículo 91 de la Ley 30 de 1986 y el Parágrafo del artículo primero del Decreto 1146 de 1990, adoptado como legislación permanente mediante el artículo 4o. del Decreto 2272 de 1991 y,

CONSIDERANDO

Que de conformidad con el informe rendido por la División Antinarcóticos de la Policía Nacional, se ha encontrado en los laboratorios clandestinos de procesamiento de estupefacientes, alcohol isopropílico (también conocido como 2- propanol, isopropanol, alcohol propílico secundario, dimetil carbinol, protohol, ipa); metil isobutil cetona (también conocido como MIBK, isopropilacetona, hexona, 4-metil 2-pentanona) y acetato de isopropilo.

Que el Consejo Nacional de Estupefacientes ha tenido conocimiento del aumento desmesurado en la importación de dichas sustancias, sin el correlativo crecimiento de las necesidades de las mismas en la Industria Nacional.

Que el artículo primero de la Resolución No. 009 de 1987 del Consejo Nacional de Estupefacientes establece entre otras, como sustancias controladas, el amoniaco y el ácido sulfúrico.

Que se han encontrado dificultades para el control del amoniaco anhidro y del oleum, sustancias a partir de las cuales se obtienen el hidróxido de amonio y el ácido sulfúrico por disolución en agua, ya que el artículo citado no es claro en cuanto a que estas composiciones, están incluidas dentro del nombre genérico del ácido sulfúrico y el amoniaco.

Que el Consejo Nacional de Estupefacientes en sesión del 26 de Octubre de 1994 aprobó la inclusión del alcohol isopropílico (también conocido como 2-propanol, isopropanol, alcohol propílico secundario, dimetil carbinol, protohol, ipa); del metil isobutil cetona (también conocido como MIBK, isopropilacetona, hexona, 4-metil 2-pentanona) y acetato de isopropilo, como sustancias objeto de control.

1 Nota de la Secretaría E/NL.1987/71

RESUELVE

- Artículo 1o. Adicionar el artículo primero de la Resolución No. 009 de 1987, proferida por el Consejo Nacional de Estupefacientes en el sentido de incluir como sustancias sujetas a control, el alcohol isopropílico (también conocido como 2 propanol, isopropanol, alcohol propílico secundario, dimetil carbinol, petrohol, ipa); el metil isobutil cetona (también conocido como MIBK, isopropilacetona, hexona, 4-metil 2-pentanona) y el acetato de isopropilo, en cantidades superiores a cinco (5) litros líquidos.
- Artículo 2o. Todas las personas naturales o jurídicas que compren, importen, distribuyan, consuman, produzcan o presten el servicio de almacenamiento de las sustancias indicadas en el artículo primero de la presente Resolución, en las cantidades establecidas, deberán obtener o ampliar el Certificado de Carencia de Informes por Tráfico de Estupefacientes expedido por la Dirección Nacional de Estupefacientes y el correspondiente registro en el Ministerio de Salud, dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir de la entrada en vigencia de esta Resolución.
- Artículo 3o. Aclarar el artículo primero de la Resolución No. 009 de febrero 18 de 1987, en el sentido de indicar que cuando se menciona el amoníaco, como sustancia sujeta a control, se comprende tanto el amonio hidróxido como el amoníaco anhidro o gas refrigerante y que cuando se menciona el ácido sulfúrico también se comprende el oleum.
- Artículo 4o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

Dada en Santafé de Bogotá, a los

30 ENE. 1995

PUBLIQUESE Y CUMPLASE


NESTOR HUMBERTO MARTÍNEZ NEIRA
Presidente


MARGARITA HERNÁNDEZ CORTÉS
Secretaría Ejecutiva

RESOLUCION NUMERO

00200

23 ENE 1996

Por la cual se modifica la Resolución número 6980 de 1991 del Ministerio de Salud y se adiciona el listado de materias primas y medicamentos de control especial.

EL MINISTRO DE SALUD

en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por el artículo 20 literal e) de la ley 30 de 1986, y oído el concepto de la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos y del INVIMA, y

CONSIDERANDO:

Que con base en el artículo 12 de la Convención de Viena de 1988, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes solicitó al Gobierno la inclusión de las sustancias efedrina, pseudoefedrina y metcatinona, dentro del grupo I de la Convención de 1961.

Que mediante escritos de fechas 11 de abril, 7 de junio, 26 de julio 3 y 31 de agosto de 1995, la Dirección del Fondo Nacional de Estupefacientes pidió a la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos del Invima el estudio y evaluación de la solicitud presentada por la JIFE.

Que la citada Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos incluyó las sustancias efedrina, pseudoefedrina y metcatinona, dentro de la lista de control especial, según Acta número 31 de fecha 20 de septiembre de 1995.

Que igualmente la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes solicitó al Gobierno Colombiano, la inclusión del principio activo flunitrazepam dentro de la lista de sustancias de control especial.

Que el mencionado principio activo figura en la lista de sustancias de control especial del Fondo Nacional de Estupefacientes dentro del grupo IV que pertenece a TRANQUILIZANTES E HIPNOTICOS NO BARBITURICOS*.

Que la Dirección del Fondo Nacional de Estupefacientes solicitó mediante comunicación a la Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos del Invima el ajuste en las listas de control especial de este principio activo.

Que la citada Comisión Revisora de Productos Farmacéuticos conceptuó que el principio activo flunitrazepam debe figurar en la lista del grupo III perteneciente a "ANFETAMINAS", ANOREXIANTES Y ESTIMULANTES GENERALES", según acta número 37 de fecha 22 de septiembre de 1995.

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Modificar la Resolución número 6980 de 1991, emanada de este Ministerio en el sentido de incluir la sustancia metcatinona en la lista correspondiente al artículo 2o., grupo 1 "PRIMERA PARTE, ESTUPEFACIENTES Y ANALGÉSICOS ESPECIALES".

Continuación de la Resolución por la cual se modifica la Resolución número 6980 de 1991 del Ministerio de Salud y se adiciona el listado de materias primas y medicamentos de control especial.

ARTICULO SEGUNDO.- Incluir las sustancias **Efedrina y Pseudoefedrina** en el listado contenido en el artículo 4o. Grupo VI **TRANQUILIZANTES E HIPNÓTICOS NO BARBITÚRICOS** de la Resolución 6980 de 1991, expedida por este Organismo.

ARTICULO TERCERO.- Excluir el principio activo flunitrazepam del grupo IV "Tranquilizantes e hipnóticos no barbitúricos, correspondiente al artículo 2o. de la Resolución 6980 de 1991, expedida por este Ministerio, e incluirlo en el grupo III perteneciente a "ANFETAMINAS, ANOREXIANTES Y ESTIMULANTES GENERALES" del mismo artículo 2o. de la citada Resolución.

ARTICULO CUARTO.- Los demás aspectos contemplados en la Resolución No. 6980 de 1991, continúan vigentes.

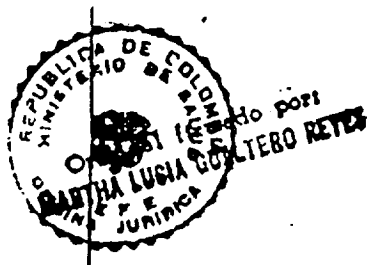
ARTICULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en santafé de Bogotá D.C. a los 23 ENE 1998


AUGUSTO GALÁN SARMIENTO
Ministro de Salud


FRIDOLF BALLEEN DUQUE
Secretario General



LEY 365 de 1997

“Por la cual se establecen normas tendientes a COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA y se dictan otras disposiciones”.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DECRETA:

Artículo 1.- El numeral (4o.) del artículo 42 del Código Penal, quedará así:

4. Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, industria o comercio.

Artículo 2.- El Código de Procedimiento Penal tendrá un artículo 61A, del siguiente tenor :

ARTÍCULO 61A : Cancelación de personería jurídica de sociedades u organizaciones dedicadas al desarrollo de actividades delictivas o cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.- Cuando en cualquier momento del proceso el funcionario judicial encuentre demostrado que se han dedicado total o parcialmente personas jurídicas, sociedades u organizaciones al desarrollo de actividades delictivas, ordenará a la autoridad competente que, previo el cumplimiento de los requisitos legales establecidos para ello, proceda a la cancelación de su personería jurídica o al cierre de sus locales o establecimientos abiertos al público.

Artículo 3.- El artículo 44 del Código Penal, quedará así:

ARTÍCULO 44: Duración de la pena.- La duración máxima de la pena es la siguiente:

- Prisión, hasta sesenta (60) años.
- Arresto, hasta ocho (8) años.
- Restricción domiciliaria, hasta cinco (5) años.
- Interdicción de derechos y funciones públicas, hasta diez (10) años.
- Prohibición del ejercicio de un arte, profesión u oficio, industria o comercio, hasta cinco (5) años.
- Suspensión de la patria potestad, hasta quince (15) años.

Artículo 4.- El artículo 58 del Código Penal, quedará así

ARTÍCULO 58: Prohibición del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesión u oficio.- Siempre que se cometa un delito con abuso del ejercicio de una industria, comercio, arte, profesión u oficio, o contraviniendo las obligaciones que de ese ejercicio se deriven, el juez, al imponer la pena, podrá privar al responsable del derecho de ejercer la mencionada industria, comercio, arte, profesión u oficio, por un término hasta de cinco (5) años.

Artículo 5.- El Código Penal tendrá un artículo con el número 63A, del siguiente tenor :

ARTÍCULO 63A : Agravación por el lugar de comisión del delito.- Cuando el hecho punible fuere dirigido o come-

tido total o parcialmente desde el interior de un lugar de reclusión por quien estuviere privado de su libertad, o total o parcialmente fuera del territorio nacional, la pena se aumentará hasta la mitad, siempre que dicha circunstancia no constituya hecho punible autónomo ni elemento del mismo.

Artículo 6.- El artículo 176 del Código Penal tendrá un párrafo del siguiente tenor :

PARÁGRAFO: Cuando se ayude a eludir la acción de la autoridad o a entorpecer la investigación de hechos punibles de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión.

Artículo 7.- El artículo 177 del Código Penal, quedará así:

ARTÍCULO 177: Recepción.- El que sin haber tomado parte en la ejecución de un delito adquiriera, posea, convierta o transmita bienes muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá en pena de prisión de uno (1) a cinco (5) años y multa de cinco (5) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales, siempre que el hecho no constituya otro delito de mayor gravedad.

Si la conducta se realiza sobre un bien cuyo valor sea superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales, la pena privativa de la libertad se aumentará de una tercera parte a la mitad.

Artículo 8.- El artículo 186 del Código Penal, quedará así:

ARTÍCULO 186 : Concierto para delinquir.- Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será penada, por ese solo hecho, con prisión de tres (3) a seis (6) años.

Si actuaren en despoblado o con armas, la pena será prisión de tres (3) a nueve (9) años.

Cuando el concierto sea para cometer delitos de terrorismo, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicarios la pena será de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de dos mil (2.000) hasta cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

La pena se aumentará del doble al triple para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o la asociación para delinquir.

Artículo 9.- El Título VII del Libro IIo. del Código Penal tendrá un Capítulo Tercero denominado "*Del Lavado de Activos*", con los siguientes artículos:

ARTÍCULO 247 A : Lavado de Activos.- El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión o relacionadas con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, le dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derechos sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto para

ocultar o encubrir su origen ilícito incurrirá, por ese solo hecho, en pena de prisión de seis (6) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

La misma pena se aplicará cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes que conforme al párrafo del artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, hayan sido declaradas de origen ilícito.

PARÁGRAFO 1o. : El lavado de activos será punible aun cuando el delito del que provinieren los bienes, o los actos penados en los apartados anteriores hubiesen sido cometidos, total o parcialmente, en el extranjero.

PARÁGRAFO 2o. : Las penas previstas en el presente artículo se aumentarán de una tercera parte (1/3) a la mitad (1/2) cuando para la realización de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introdujeran mercancías al territorio nacional.

PARÁGRAFO 3o. : El aumento de pena previsto en el Párrafo anterior, también se aplicará cuando se introdujeran mercancías de contrabando al territorio nacional.

ARTÍCULO 247 B : Omisión de Control.- El empleado o directivo de una institución financiera o de una cooperativa de ahorro y crédito que, con el fin de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero omita el cumplimiento de alguno o todos los mecanismos de control establecidos por los artículos 103 y 104 del Decreto 663 de 1993 para las transacciones en efectivo incurrirá, por ese solo hecho, en pena de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a diez mil (10.000) salarios mínimos legales mensuales.

ARTÍCULO 247C : Circunstancias específicas de agravación.- Las penas privativas de la libertad previstas en el artículo 247 A se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea desarrollada por persona que pertenezca a una persona jurídica, una sociedad o una organización dedicada al lavado de activos y de la mitad a las tres cuartas partes cuando sean desarrolladas por los jefes, administradores o encargados de las referidas personas jurídicas, sociedades u organizaciones.

ARTÍCULO 247D : Imposición de penas accesorias.- Si los hechos previstos en los artículos 247 A y 247 B fueron realizados por empresario de cualquier industria, administrador, empleado, directivo o intermediario en el sector financiero, bursátil o asegurador según el caso, servidor público en el ejercicio de su cargo, se le impondrá, además de la pena correspondiente, la de pérdida del empleo público u oficial o la de prohibición del ejercicio de su arte, profesión u oficio, industria o comercio según el caso, por un tiempo no inferior a tres (3) años ni superior a cinco (5).

Artículo 10.- El literal d) del artículo 369 A del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

d) : Delación de dirigentes de organizaciones delictivas acompañada de pruebas eficaces de su responsabilidad.

Artículo 11.- El artículo 37 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

ARTÍCULO 37 : Sentencia anticipada.- Ejecutoriada la resolución que defina la situación jurídica y hasta antes de que se cierre la investigación, el procesado podrá solicitar que se dicte sentencia anticipada.

Hecha la solicitud, el fiscal, si lo considera necesario, podrá ampliar la indagatoria y practicar pruebas dentro de un plazo máximo de ocho (8) días. Los cargos formulados por el fiscal y su aceptación por parte del procesado se consignarán en un acta suscrita por quienes hayan intervenido.

Las diligencias se remitirán al juez competente quien, en el término de diez (10) días hábiles, dictará sentencia conforme a los hechos y circunstancias aceptados, siempre que no haya habido violación de garantías fundamentales.

El juez dosificará la pena que corresponda y sobre el monto que determine hará una disminución de una tercera (1/3) parte de ella por razón de haber aceptado el procesado su responsabilidad.

También se podrá dictar sentencia anticipada, cuando proferida la resolución de acusación y hasta antes de que se fije fecha para la celebración de la audiencia pública el procesado aceptare la responsabilidad penal respecto de todos los cargos allí formulados. En este caso la rebaja será de una octava (1/8) parte de la pena.

Artículo 12.- El artículo 37 B del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

ARTÍCULO 37 B : Disposiciones comunes.- En los casos de los artículos 37 y 37A de este Código se aplicarán las siguientes disposiciones:

1. **Concurrencia de rebajas.-** La rebaja de pena prevista en el artículo 299 de este Código podrá acumularse a aquella contemplada en el artículo 37 o a la señalada en el artículo 37 A, pero en ningún caso podrán estas últimas acumularse entre sí.

2. Equivalencia a la resolución de acusación.- El acta que contiene los cargos aceptados por el procesado en el caso del artículo 37 o el acta que contiene el acuerdo a que se refiere el artículo 37A, son equivalentes a la resolución de acusación.

3. Ruptura de la unidad procesal.- Cuando se trate de varios procesados o delitos, pueden realizarse aceptaciones o acuerdos parciales, caso en el cual se romperá la unidad procesal.

4. Interés para recurrir.- La sentencia es apelable por el fiscal, el Ministerio Público, por el procesado y por su defensor, aunque por estos dos últimos sólo respecto de la dosificación de la pena, el subrogado de la condena de ejecución condicional, y la extinción del dominio sobre bienes.

5. Exclusión del tercero civilmente responsable y de la parte civil.- Cuando se profiera sentencia anticipada en los eventos contemplados en los artículos 37 ó 37A de este código, en dicha providencia no se resolverá lo referente a la responsabilidad civil.

Artículo 13.- El artículo 71 del Código de Procedimiento Penal tendrá un nuevo numeral del siguiente tenor :

6. De los procesos por los delitos de concierto para delinquir en los casos contemplados en el inciso 3o. del artículo 186 del Código Penal, así como de los procesos por los delitos de que tratan los artículos 247A y 247 B del Código Penal.

Artículo 14.- El artículo 340 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

ARTÍCULO 340 : Extinción del derecho de dominio.-

Por sentencia judicial se declarará extinguido el dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del patrimonio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Para estos efectos, los delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, así como los delitos de secuestro simple, secuestro extorsivo, extorsión, lavado de activos y testaferrato, los delitos contra el orden económico social, delitos contra los recursos naturales, fabricación y tráfico de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas militares, concusión, cohecho, tráfico de influencias, rebelión, sedición, asonada se considera que causan grave deterioro de la moral social. En todo caso quedan a salvo los derechos de terceros de buena fe. Los bienes y recursos sobre los cuales se declare la extinción del dominio, sin excepción alguna, ingresarán al fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y la Lucha contra el Crimen Organizado y serán asignados por el Consejo Nacional de Estupefacientes.

PARÁGRAFO : En las investigaciones y procesos penales adelantados por delitos de extorsión, secuestro extorsivo, testaferrato, lavado de activos, delitos contemplados en el Estatuto Nacional de Estupefacientes y las normas que lo modifiquen o adicionen, enriquecimiento ilícito de servidores públicos o de particulares, peculado, interés ilícito en la celebración de contratos, contratos celebrados sin requisitos legales, emisión ilegal de moneda o de efectos o valores equiparados en moneda, ejercicio ilícito de actividades monopolísticas o de arbitrio rentístico, hurto sobre efectos y enseres destinados a la seguridad y la defensa nacionales, delitos contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, utilización indebida de información privilegiada,

utilización de asuntos sometidos a secreto o reserva, la declaración de que un bien mueble o inmueble es de origen ilícito es independiente de la responsabilidad penal del sindicado y de la extinción de la acción penal o de la pena. En estos casos procederá la extinción del dominio de conformidad con lo dispuesto en la Ley que regula esta acción real.

Salvo que el proceso termine por demostración de la inexistencia del hecho, la declaración de que un bien mueble o inmueble es de origen ilícito se hará en la resolución inhibitoria, en la resolución de preclusión de la investigación, en el auto de cesación de procedimiento o en la sentencia. En la misma providencia y con miras al adelantamiento del proceso de extinción del derecho de dominio se ordenará el embargo y secuestro preventivo de los bienes declarados de origen ilícito.

Artículo 15.- El artículo 369 H del Código de Procedimiento Penal tendrá un párrafo del siguiente tenor :

PARÁGRAFO: Quien sea condenado por el delito de concierto para delinquir agravado por organizar, fomentar, promover, dirigir, encabezar, constituir o financiar el concierto o la asociación, en concurso con otro delito, podrá acogerse a la sentencia anticipada o audiencia especial y tendrá derecho a las rebajas por confesión y por colaboración eficaz con la justicia, pero en ningún caso la pena que se le imponga podrá ser inferior a la que corresponda en concreto sin disminuciones para el delito más grave.

Artículo 16.- El numeral 4o. del artículo 508 del Código de Procedimiento Penal, quedará así:

4. Si se tratare de la prohibición de ejercer una industria, comercio, arte, profesión u oficio, se ordenará la cancela-

ción del documento que lo autoriza para ejercerlo y se oficiará a la autoridad que lo expidió.

Artículo 17.- El artículo 33 de la Ley 30 de 1986, quedará así:

ARTÍCULO 33: El que sin permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de seis (6) a veinte (20) años y multa de cien (100) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 18.- El artículo 34 de la Ley 30 de 1986, quedará así:

ARTÍCULO 34: El que destine ilícitamente bien mueble o inmueble para que en él se elabore, almacene o transporte, venda o use alguna de las drogas a que se refiere el artículo 32 y/o autorice o tolere en ellos tal destinación incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 124 y 125 del Decreto-Ley 522 de 1971 (artículo 208, ordinal 5o. y 214, ordinal 3o. del Código Nacional de Policía).

Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, trescientos (300) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína, veinte (20) gramos de derivados de la amapola o doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de uno (1) a tres (3) años de prisión y multa en cuantía de dos (2) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil (3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de derivados de la amapola o cuatro mil (4.000) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de tres (3) a ocho (8) años de prisión y multa de diez (10) a ochocientos (800) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 19.- El artículo 40 de la Ley 30 de 1986, quedará así:

ARTÍCULO 40: En la providencia en la que se imponga medida de aseguramiento por alguno de los delitos previstos en los artículos 33, 34 y 43 de esta Ley, el funcionario

judicial decretará el embargo y secuestro preventivo de los bienes de propiedad del sindicado que no se hallen incautados con ocasión del hecho punible, en cuantía que considere suficiente para garantizar el pago de la multa prevista en tales artículos, y designará secuestro. Una vez decretado el embargo y secuestro, tanto su práctica como el régimen de formulación, decisión y trámite de las oposiciones a la misma, se adelantará conforme a las normas que regulan la materia en el Código de Procedimiento Civil.

En la sentencia condenatoria se ordenará el remate de los bienes embargados y secuestrados dentro del proceso, para lo cual se tendrán en cuenta los trámites prescritos en el Código de Procedimiento Civil.

Artículo 20.- El Artículo 43 de la Ley 30 de 1986, quedará así:

ARTÍCULO 43: El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como: éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de tres (3) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales.

Salvo lo previsto en el artículo 54 del Decreto Ley 099 de 1991, adoptado como legislación permanente por el artículo 1o. del Decreto Ley 2271 de 1991, tales elementos, una vez identificados pericialmente, serán puestos por el funcionario judicial a órdenes de la Dirección Nacional de Es-

tupefacientes, la cual podrá disponer de su inmediata utilización por parte de una entidad oficial, su remate para fines lícitos debidamente comprobados, o su destrucción, si implican grave peligro para la salubridad o seguridad públicas.

Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de dos (2) a cinco (5) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales.

Artículo 21.- Adiciónase el artículo 209 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el siguiente párrafo:

PARÁGRAFO: Cuando los actos violatorios a que hace referencia el presente artículo recaigan sobre las disposiciones contenidas en el Capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta de cincuenta millones de pesos (\$50'000.000.00) a favor del Tesoro Nacional. Esta suma se reajustará en la forma prevista en el inciso primero del presente artículo.

Esta multa podrá ser sucesiva mientras subsista el incumplimiento de la norma y se aplicará sin perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar por cada infracción cometida.

Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá exigir la remoción inmediata del infractor y comunicar esta determinación a todas las entidades vigiladas.

Artículo 22.- Adiciónase el artículo 211 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, con el siguiente numeral:

3.- Disposiciones relativas a la prevención de conductas delictivas.- Cuando la violación a que hace referencia el numeral primero del presente artículo recaiga sobre las disposiciones contenidas en el capítulo XVI de la Parte Tercera del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la multa que podrá imponerse será hasta mil millones de pesos (\$1.000'000.000.00).

Adicionalmente, el Superintendente Bancario podrá ordenar al establecimiento multado que destine una suma hasta de mil millones de pesos (\$1.000'000.000.00) a la implementación de mecanismos correctivos de carácter interno que deberá acordar con el mismo organismo de control.

Estas sumas se reajustarán en la forma prevista en el inciso primero del presente artículo.

Artículo 23.- Entidades Cooperativas que realizan actividades de Ahorro y Crédito.- Además de las entidades Cooperativas de Grado Superior que se encuentran bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria, también estarán sujetas a lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las Entidades Cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito.

Para las entidades no vigiladas por la Superintendencia Bancaria, el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas - Dancoop - determinará las cuantías a partir de las cuales deberá dejarse constancia de la información relativa a transacciones en efectivo.

Así mismo, reglamentará y recibirá el informe periódico sobre el número de transacciones en efectivo a que hace referencia el artículo 104 del Estatuto Orgánico del Sistema

Financiero, como también el informe mensual sobre registro de las múltiples transacciones en efectivo a que hace referencia el numeral 2o. del artículo 103 del mismo Estatuto, que realicen las entidades Cooperativas que no se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Bancaria.

Las obligaciones contenidas en este artículo empezarán a cumplirse en la fecha que señale el Gobierno Nacional.

Artículo 24.- Modifícase el literal a) del numeral 1o. del artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el cual quedará así:

a) La identidad, la firma y la dirección de la persona que físicamente realice la transacción. Cuando el registro se lleve en forma electrónica, no se requerirá la firma.

Artículo 25.- El artículo 104 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, quedará así:

ARTÍCULO 104 : Información periódica.- Toda institución financiera deberá informar periódicamente a la Superintendencia Bancaria el número de transacciones en efectivo a las que se refiere el artículo anterior y su localización geográfica, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta ese organismo.

Artículo 26.- Vigencia.- La presente Ley rige a partir de la fecha de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

En especial, deróganse los literales e, f y h del artículo 369 A, el artículo 369 B y el inciso del artículo 369 E del Código de Procedimiento Penal; los artículos 10, 11, 12 y 13 de la Ley 104 de 1993; el artículo 2o. de la Ley 241 de 1995; el

inciso 2o. del artículo 28 del Código Penal modificado por el artículo 31 de la Ley 40 de 1993 y el artículo 41 de la Ley 30 de 1986.

Subróganse el artículo 44 de la Ley 30 de 1986, el artículo 7o. del Decreto 180 de 1988 adoptado como legislación permanente por el artículo 4o. del Decreto Extraordinario 2266 de 1991, el artículo 1o. del Decreto Ley 1194 de 1989 adoptado como legislación permanente por el artículo 6o. del Decreto 2266 de 1991, el artículo 5o. de la Ley 40 de 1993 y el inciso 4o. del artículo 32 de la Ley 40 de 1993 que modificó el artículo 355 del Código Penal de 1980.

Parágrafo.- A partir de la vigencia de la presente Ley sólo podrán concederse los beneficios por colaboración con la justicia previstos en la Ley 81 de 1993, en los términos en que es modificada por la presente Ley.

Quienes al momento de entrar en vigencia la presente Ley hubiesen solicitado de las autoridades judiciales competentes el reconocimiento de alguno de los beneficios consagrados en otras leyes, siempre y cuando se den los presupuestos para su aplicación, permanecerán sometidos para efectos de la regulación de tales beneficios a dicha normatividad.

EL PRESIDENTE DEL
H. SENADO DE LA REPÚBLICA
LUIS FERNANDO LONDOÑO CAPURRO

EL SECRETARIO GENERAL DEL
H. SENADO DE LA REPÚBLICA
PEDRO PUMAREJO VEGA

EL PRESIDENTE DE LA
H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
GIOVANNI LAMBOGLIA MAZZILLI

EL SECRETARIO DE LA
H. CÁMARA DE REPRESENTANTES
DIEGO VIVAS TAFUR

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBIERNO NACIONAL**

Publíquese y ejecútese.

Dado en Santafé de Bogotá, D. C., a 21 de febrero de 1997.

ERNESTO SAMPER PIZANO

El Ministro de Justicia y del Derecho

CARLOS EDUARDO MEDELLÍN BECERRA